



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, veinticuatro (24) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

PROCESO: ORDINARIO LABORAL
ASUNTO: APELACIÓN AUTO QUE NIEGA DECRETO DE PRUEBAS
DEMANDANTE: DORIAN ALBERTO ARREDONDO COLORADO
DEMANDADO: LOCERIA COLOMBIANA S.A.S
RADICADO: 051293103 001 2021 00051 01
ACTA N°: 12

La Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conformada por los magistrados **ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN y MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA** procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante frente al auto proferido por el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Caldas mediante el cual negó parcialmente el decreto de pruebas.

A continuación, la Sala previa deliberación sobre el asunto, como consta en el **acta 12** de discusión de proyectos, adoptó el presentado por la ponente, doctora Ana María Zapata Pérez, el cual quedó consignado en los siguientes términos:

1. ANTECEDENTES

1.1. LA DEMANDA

El señor ARREDONDO COLORADO pretende con este proceso se condene al reintegro a su puesto de trabajo o a uno de mejor categoría sin solución de continuidad, con el pago de los emolumentos y prestaciones dejados de percibir; se reanude el pago de aportes a la seguridad social y se condene al pago de la sanción de 180 días de salario por haber sido despedido sin autorización del Ministerio de trabajo¹.

En lo que es relevante para esta decisión, se afirmó en los hechos de la demanda: **i)** Que el 2 de marzo de 2018 se presentó a laborar y en el curso de sus actividades fue remitido a la enfermería por sospecha de haber ingerido licor, y que en principio se mostró dispuesto a que se le practicara la prueba de alcoholemia, pero luego se negó a firmar el “consentimiento informado” porque estaba en blanco el formulario, sin ser claros los lineamientos para su diligenciamiento o se indicara la seriedad de la prueba. **ii)** Que las conclusiones de la historia clínica sobre el estado de alicoramiento no tienen sustento probatorio, siendo sólo afirmaciones del personal de salud ocupacional y la **LOCERÍA COLOMBIANA S.A.S** no tenía autorización para la realización de esos exámenes por lo que no tenía un documento con las características propias de un consentimiento informado;

¹ PDF 02 de la carpeta de primera instancia; páginas 1 a 19.

iii) Que las labores encomendadas por su situación de salud en un puesto de *resana* no permitían causar daños a la empresa ni sus ocupantes. Se encontraba en estado de debilidad manifiesta en atención al síndrome de manguito rotador diagnosticado y pese a su estado de salud fue despedido con un señalamiento de carácter subjetivo.

En el acápite de pruebas relacionó diferentes mediante probatorios (documental, testimonial, interrogatorio de parte e inspección judicial en las instalaciones de la empresa) y solicitó tres (3) **oficios** dirigidos a la pasiva con el fin de que aporte: **i)** El video de su ingreso a las instalaciones el 2 de marzo de 2018 al turno correspondiente. **ii)** Los certificados de las restricciones de salud que tuvo al servicio de la empresa en su puesto de trabajo al momento del despido. **iii)** La copia del certificado médico de egreso².

1.2. LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

En lo que interesa en esta oportunidad a la Sala, LOCERÍA COLOMBIANA S.A.S se opuso a las pretensiones y manifestó: **i)** Que el actor se negó a practicarse la prueba aun cuando se verificó la calibración del equipo e idoneidad de la persona que aplicaría la prueba y que el formulario contenía la información suficiente para la práctica, que el actor había admitido ingerir licor la noche anterior y presentaba diferentes signos físicos de embriaguez. No es la primera vez que el demandante se presentaba alicorado y estaba reincidiendo en la falta y en el área de trabajo en la que se desempeñaba sí habían riesgos como equipos eléctricos, desniveles, circulación de montacargas, hornos, entre otros. **ii)** Que el actor conocía plenamente el procedimiento para la aplicación de la prueba y no se trata de un sujeto de especial protección, señalando que la terminación de su contrato obedeció a una causal objetiva tal como se le notificó en la carta de despido. Propuso como **excepciones** las de JUSTA CAUSA PARA TERMINAR EL CONTRATO DE TRABAJO, INEXISTENCIA DE DEBILIDAD MANIFIESTA, COMPENSACIÓN, PRESCRIPCIÓN DE DERECHOS Y CADUCIDAD DE LA ACCIÓN, BUENA FE.

1.3. DEL DECRETO DE PRUEBAS EN PRIMERA INSTANCIA Y EL RECURSO

En audiencia del **4 de noviembre de 2021**³, la juez decretó la prueba documental aportada por las partes, los testimonios y los interrogatorios de parte. Y negó la inspección judicial solicitada en la demanda.

Y sobre los **tres oficios** que se solicitó fueran librados, argumentó que no se evidencia que la parte hubiese elevado solicitud o derecho de petición a la demandada para la obtención de tales pruebas solicitadas y en consecuencia se abstenía de decretarlos, **sin perjuicio de que posteriormente se decretaran de oficio en caso de requerirse.**

² Con auto del 5 de marzo de 2021 se admitió la demanda y se ordenó la notificación de la demandada. PDF 03 de la carpeta de primera instancia.

³ PDF 29 de la carpeta de primera instancia.

Inconforme con esta determinación, la apoderada de la activa interpuso recurso de apelación en el que insistió en que el despacho debía conocer el vídeo de ingreso del demandante a la empresa, las restricciones médicas y la situación de salud al momento del despido, y el certificado médico de egreso del cual no se le hizo entrega al señor DORIAN ALBERTO.

2. TRÁMITE EN ESTA INSTANCIA Y PROBLEMAS JURÍDICOS.

Mediante auto del 13 de febrero de 2023⁴ se admitió el recurso de apelación otorgándose el traslado para alegar sin que las partes hubiesen intervenido.

Pues bien, la competencia de la Sala está dada por las materias del recurso de apelación y se contrae a determinar si se encuentra ajustada a derecho la decisión de no decretar los tres oficios dirigidos a la demandada, pruebas solicitadas en la demanda.

3. CONSIDERACIONES

De acuerdo a los ANTECEDENTES de esta providencia, encontramos que entre las pruebas solicitadas en la demanda se encuentran en el acápite de oficios los siguientes:

- 1- Que se oficie a la empresa para que aporte al proceso el video en el cual se encuentra registrado el ingreso del actor el día 2 de marzo de 2018, turno de 6: 00 am a 2:00 p.m.
- 2- Que se oficie al demandado para que con destino al proceso aporte las correspondientes restricciones de salud que presentaba el actor cuando estuvo a su servicio y el puesto de trabajo en el cual se desempeñaba al momento de su retiro.
- 3- Que se oficie a la accionada para que aporte al proceso copia del certificado médico de egreso del actor.

Y para efectuar el análisis en esta instancia, debe partirse de las siguientes premisas: En materia laboral⁵ son admisibles todos los medios de prueba establecidos en la ley⁶, como la inspección judicial⁷, los documentos, informes, testimonios de terceros, entre otros medios útiles para la formación del convencimiento del juez. Y es claro que el Juez tiene la facultad de rechazar las pruebas inconducentes o superfluas⁸, por lo que debe la parte argumentar la pertinencia de la prueba que solicita y exponer lo que se pretende demostrar con el medio probatorio.

Sobre este asunto, la Corte Constitucional ha adoctrinado que es competencia exclusiva del Juez analizar la validez, aptitud, pertinencia y conducencia de las pruebas solicitadas,

⁴ PDF 02 de la carpeta de segunda instancia.

⁵ En el proceso laboral, la oportunidad de solicitar las pruebas es la presentación de la demanda, la contestación y la corrección de la demanda. Estas deben ser decretadas o negadas por el juez en la etapa del decreto de pruebas del artículo 77 del CPTSS y en el caso de rechazarla debe hacerlo mediante decisión motivada en los términos del artículo 53 del CPTSS.

⁶ Art 51 CPTSS. **MEDIOS DE PRUEBA.** Son admisibles todos los medios de prueba establecidos en la ley, pero la prueba pericial sólo tendrá lugar cuando el Juez estime que debe designar un perito que lo asesore en los asuntos que requieran conocimientos especiales.

⁷ Reglada en los artículos 236 y siguientes del CGP.

⁸ Art 53 CPTSS. **RECHAZO DE PRUEBAS Y DILIGENCIAS INCONDUENTES.** El juez podrá, en decisión motivada, rechazar la práctica de pruebas y diligencias inconducentes o superfluas en relación con el objeto del pleito.

que darán pie a la formación de su convencimiento y serán el sustento de la decisión del litigio⁹:

En consecuencia, la negativa a ordenar la práctica de determinadas pruebas “sólo puede obedecer a la circunstancia de que ellas no conduzcan a establecer la verdad sobre los hechos materia del proceso o que estén legalmente prohibidas o sean ineficaces o versen sobre hechos notoriamente impertinentes o se las considere manifiestamente superfluas (...)”¹⁰.

En primer lugar, el Código General del proceso al regular los deberes de las partes y sus apoderados contempla:

ARTÍCULO 78. DEBERES DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS. Son deberes de las partes y sus apoderados: [...]

10. Abstenerse de solicitarle al juez la consecución de documentos que directamente o por medio del ejercicio del derecho de petición hubiere podido conseguir.

En segundo lugar, tratándose del **decreto de pruebas**, el mismo cuerpo normativo –CGP– regula el régimen probatorio y las oportunidades probatorias en los siguientes términos:

ARTÍCULO 173. OPORTUNIDADES PROBATORIAS. Para que sean apreciadas por el juez las pruebas deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados para ello en este código.

En la providencia que resuelva sobre las solicitudes de pruebas formuladas por las partes, el juez deberá pronunciarse expresamente sobre la admisión de los documentos y demás pruebas que estas hayan aportado. **El juez se abstendrá de ordenar la práctica de las pruebas que, directamente o por medio de derecho de petición, hubiera podido conseguir la parte que las solicite, salvo cuando la petición no hubiese sido atendida, lo que deberá acreditarse sumariamente.**

Las pruebas practicadas por comisionado o de común acuerdo por las partes y los informes o documentos solicitados a otras entidades públicas o privadas, que lleguen antes de dictar sentencia, serán tenidas en cuenta para la decisión, previo el cumplimiento de los requisitos legales para su práctica y contradicción. **(resalto intencional)**

Sobre el inciso anterior subrayado, la Corte Constitucional declaró su exequibilidad tras aplicar el test de proporcionalidad, encontrándolo ajustado a la constitución. Explicó la Alta Corporación¹¹:

Encontró que: (i) los contenidos normativos acusados persiguen la realización de importantes principios constitucionales, en tanto se inscriben dentro de las llamadas cargas procesales que aluden a la organización de un proceso judicial con carácter dispositivo, de tal manera que garantice los principios de igualdad de las partes y lealtad procesal, sin afectar los principios de imparcialidad e independencia del juez.

(ii) Los contenidos normativos acusados constituyen un medio adecuado para realizar los principios constitucionales de igualdad toda vez que las cargas procesales que contienen contribuyen con lo propio de manera efectiva ya que su cumplimiento permite organizar el adelantamiento del proceso, de tal manera que éste no resulte caótico.

(iii) Las normas acusadas no son evidentemente desproporcionadas porque está justificada la afectación de aquellos principios que promocionan la verdad como

⁹ Sentencia T-452 de 1998.

¹⁰ Sentencia T-393 de 1994, MP. Antonio Barrera Carbonell.

¹¹ Véase comunicado 08 del 16 y 17 de marzo de 2022, sobre la sentencia **C-099 de 2022**, consultable en <https://www.corteconstitucional.gov.co/comunicados/Comunicado%20No.%2008%20-%20Marzo%2016%20y%2017%20de%202022.pdf> a partir de la página 2.

justicia, en favor de aquellos que promueven la imparcialidad, la igualdad y la lealtad como justicia.

La Corte indicó que una de las formas en la que se satisface la verdad en el proceso como forma de justicia, es precisamente obligando a las partes a cumplir con sus cargas procesales, y así al juez a honrar dicha obligación. Por eso no es razonable sostener que tras perder la oportunidad procesal de aportar una prueba al expediente se configura una afectación desproporcionada del propósito constitucional del derecho a la prueba (hallar la verdad y con base en ella adjudicar derechos), cuando ello tiene como causa el incumplimiento de uno de los medios para ello, cual es el establecimiento de cargas procesales en materia probatoria.

Por demás recabó en que una prueba que no se decreta en el proceso con base en el incumplimiento de una regla procesal (carga procesal) no significa que se ha sacrificado el derecho sustancial por privilegiar las formas (artículo 29 superior). Esto por cuanto, de un lado la consecución de la prueba se constituye como una obligación de medio y no de resultado; la prueba garantiza una posibilidad y no una certeza en cuanto a la verdad en el proceso. **Y de otro lado dichos preceptos analizados no afectan la facultad oficiosa del juez para decretar pruebas; siempre podrá hacerlo si así lo considera en aras de llegar a la certeza en la definición.**

(negrillas fuera de texto)

Debiendo señalarse que, la defensa de las partes debe ceñirse a los requisitos determinados por el legislador para proteger el debido proceso; por ende, los medios probatorios aportados, los solicitados por las partes y los que decreta el juez de oficio deben satisfacer los requisitos básicos de la prueba, esto es, oportunidad, utilidad, conducencia y pertinencia, además de las exigencias dispuestas para cada tipo de prueba. Y sobre el tema, la Corte Constitucional basándose en la reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, explicó la diferencia entre los deberes, las obligaciones y las cargas procesales, adoctrinando de estas últimas¹²:

[...] las cargas procesales son aquellas situaciones instituidas por la ley que comportan o demandan una conducta de realización facultativa, normalmente establecida en interés del propio sujeto y cuya omisión trae aparejadas para él consecuencias desfavorables, como la preclusión de una oportunidad o un derecho procesal e inclusive hasta la pérdida del derecho sustancial debatido en el proceso.

Como se ve, las cargas procesales se caracterizan porque el sujeto a quien se las impone la ley conserva la facultad de cumplirlas o no, sin que el Juez o persona alguna pueda compelerlo coercitivamente a ello, todo lo contrario de lo que sucede con las obligaciones; de no, tal omisión le puede acarrear consecuencias desfavorables. Así, por ejemplo probar los supuestos de hecho para no recibir una sentencia adversa". (Subrayado fuera del texto). [...]

Y más adelante, en esta misma providencia la Corte abordó el tema de la carga dinámica de la prueba y la obligación de la parte de probar o presentar la prueba, explicando:

Esta institución pretende que quien concurre a un proceso en calidad de **parte asuma un rol activo y no se limite a refugiarse en la diligencia del juez ni se beneficie de las dificultades probatorias o mala fortuna de su contraparte**. En otras palabras, "las partes en el proceso deben cumplir con el deber de diligencia en lo que pretenden probar. Ninguna debe obrar con inercia porque ello causa que las consecuencias adversas de la decisión sean deducidas en su contra. El proceso no premia la estrategia sino la solución del conflicto con la participación de las partes" [...]

(Negrilla propia)

¹² C-086 de 2016. MP Jorge Iván Palacio Palacio

En el caso objeto de estudio, considera la Sala que debe confirmarse la decisión adoptada por las siguientes razones:

De acuerdo con los párrafos precedentes sobre el **artículo 78** en su **numeral 10** y el **artículo 173** del CGP, es claro que debe abstenerse la parte de solicitar al juez la obtención de documentos o pruebas que pudo obtener directamente o a través del ejercicio del derecho de petición. En este sentido, si no se acredita si quiera sumariamente el intento de obtener las pruebas por el interesado, debe abstenerse el juez en su decreto, sin que sea suficiente que se argumente que la prueba es necesaria o conducente.

En este caso, el video y los documentos que se pretenden a través de los oficios pudieron ser solicitados por la parte interesada directamente a la sociedad; sin embargo, no obra en el plenario prueba de alguna solicitud o derecho de petición con ese propósito, así no se indicó en la demanda ni en el recurso de apelación, sin esgrimir si quiera razones que explicaran la ausencia de sus gestiones, incumpliendo sin motivación alguna su carga procesal para la obtención de los documentos que quiere vincular al proceso como prueba.

Las normas antes reseñadas contienen una carga procesal para las partes, quienes deben colaborar con la administración de justicia realizando todas las actuaciones que estén a su alcance para obtener las pruebas que soportan sus pretensiones y no sobrecargar los organismos judiciales con trámites innecesarios so pena de que se niegue el decreto de pruebas¹³. De este modo, esta corporación encuentra la decisión adoptada de conformidad con la normatividad vigente, dejando claro sí que tal como se anunció en la providencia cuestionada, tal determinación se adopta sin perjuicio del decreto oficioso de pruebas, debiendo resaltar los precedentes reiterados de la Sala de Casación Laboral (**SL 9766- 2016, SL 2278-2020, SL 514- 2020, SL 4282-2022, SL 580-2022, SL 3962-2022 Y SL 161 – 2023**) oportunidades en las que la Alta Corporación ha expresado que los jueces deben, con ocasión de su investidura «tener iniciativa en la averiguación de la verdad real, para lo cual debe procurar, de oficio, acopiar los elementos de juicio idóneos que le permitan eliminar las dudas fundadas que tenga en torno a los supuestos fácticos del proceso, esclarecer espacios oscuros del pleito y constatar la veracidad de los hechos sometidos a su consideración»; resaltando en la **SL 9766 - 2016:**

El modelo procesal acogido por la legislación colombiana, que combina los sistemas de actividad probatoria de corte dispositivo e inquisitivo, le otorga al juez **el poder de decretar pruebas de oficio para «verificar los hechos alegados por las partes»** (núm. 4º art. 37 C.P.C.), constatar «los hechos relacionados con las alegaciones de las partes» (art. 179 C.P.C.) y, específicamente en el proceso laboral, de ordenar «la práctica de todas aquellas que a su juicio sean indispensables para el completo esclarecimiento de los hechos controvertidos» (art. 54 del

¹³ AC 5999 de 2017.

RADICADO: 051293103 001 2021 00051 01

C.P.T. y S.S.) y solicitar «las demás pruebas que considere [el tribunal] necesarias para resolver la apelación o la consulta» (art.83 del C.P.T. y S.S.).

En el Estado constitucional y democrático de Derecho, donde imperan razones de justicia material (art. 2º y 228 C.P.), las anteriores disposiciones, propias del sistema de actividad probatoria inquisitivo, cobran un especial sentido, pues le imponen al juez el deber de tener iniciativa en la averiguación de la verdad real, para lo cual debe procurar, de oficio, acopiar los elementos de juicio idóneos que le permitan eliminar las dudas fundadas que tenga en torno a los supuestos fácticos del proceso, esclarecer espacios oscuros del pleito y constatar la veracidad de los hechos sometidos a su consideración.

[...] En vista de este deber del juez poner a interactuar los sistemas dispositivos e inquisitivos, para hallar certeza sobre los hechos alegados por las partes e impartir justicia sobre verdades reales y no aparentes o formales, esta Corporación, en sus especialidades civil y laboral, ha venido sosteniendo que el poder oficioso en pruebas, **más que una facultad, es un auténtico deber del juez.**"

Negrilla intencional de la Sala

Finalmente, al no salir adelante el recurso de apelación del demandante, se causan costas a su cargo de conformidad con lo preceptuado en el numeral 1 del Art. 365 del C.G.P. El valor de las agencias en derecho es de ¼ de SMMLV.

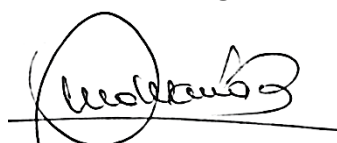
4. LA DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, **DECIDE**.

PRIMERO: CONFIRMAR la providencia del **4 de noviembre de 2021** proferida por el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Caldas, conforme el análisis efectuado en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: CONDENA en costas en contra del demandante. El valor de las agencias en derecho es ¼ de SMMLV.

Los Magistrados,



ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ

DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN
SIN FIRMA POR AUSENCIA JUSTIFICADA



MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA

RADICADO: 051293103 001 2021 00051 01

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
MEDELLÍN – SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados
N ° 033 del 27 de febrero de 2023

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/130>

RADICADO: 051293103 001 2021 00051 01



RADICADO: 051293103 001 2021 00051 01

AUTO del //24/02/2023

Con este código puede acceder a la actuación de segunda instancia, **para ello debe tener una cuenta de Microsoft**. Enlace en caso de no tener lector QR:
https://etbcsj-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/des06sltsmed_cendoj_ramajudicial_gov_co/ErG8jgDrA11BrUznD6dJ3XUBb066qmi5tv3zBG0PVxh5pw?e=KUAafx